

# LA CRISIS COLOMBIANA Y PERÚ

Isaías Rojas-Pérez<sup>1</sup>

recibido 16/01/05 aprobado 02/03/05

Este artículo contextualiza las políticas del Perú frente al conflicto colombiano en el marco de los discursos securitizadores emergidos en la región desde finales del siglo pasado. Específicamente, compara los gobiernos de Fujimori y Toledo para argumentar que, no obstante sus diferencias de naturaleza política (autoritaria en un caso y democrática en el otro), ambos gobiernos han securitizado el conflicto colombiano de forma similar, asumiendo una posición de funcionalidad y resonancia con las orientaciones de Estados Unidos respecto de la “guerra contra las drogas” y la “guerra global contra el terrorismo”. Sin embargo, se argumenta que mientras Fujimori manipuló el conflicto colombiano como parte de una estrategia para mantenerse inconstitucionalmente en el poder, Toledo lo hizo para asegurar la sobrevivencia de su mandato constitucional.

Palabras clave: securitization, terrorismo, derrame, regionalización

This article analyzes Peruvian foreign and security policies regarding the Colombian conflict in the context of the discourses on securitization emerging in the region in the late twentieth century. Specifically, it compares the governments of Fujimori and Toledo to argue that, in spite of their differences in political genealogy (authoritarian and democratic, respectively), both governments have responded to the Colombian crisis in similar ways by following U.S. security discourses regarding the “war on drugs” and the “global war on terrorism”. However, while Fujimori attempted to mobilize the Colombian conflict as part of his strategy to remain in power for an unconstitutional third term, Toledo has used it to assure the survival of his constitutional mandate.

Keywords: securitization, terrorism, spillover, regionalization

<sup>1</sup> Johns Hopkins University

Aunque el miedo por sí solo no puede ser considerado una ciencia, ciertamente es una técnica  
Albert Camus<sup>2</sup>

## Introducción

“Desde nuestra primera conversación, en usted no he encontrado *vacilación* ni *duda*, no he encontrado *cálculo* ni *malicia*; en usted lo que he encontrado es *firmeza* para apoyar la *lucha antiterrorista de Colombia*”. Tales fueron las palabras con las que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se refirió a su homólogo Alejandro Toledo, durante la ceremonia oficial con la que éste último lo recibió en octubre del 2004<sup>3</sup>. Antes de viajar a Lima, Uribe había agradecido al gobierno del Perú, sugiriendo que era el único vecino del que había recibido una colaboración muy estrecha en su lucha contra la guerrilla<sup>4</sup>. En respuesta, Toledo dijo que “No podía existir espacio para las *ambigüedades* en la lucha contra esa *alianza perversa*” entre narcotráfico y terrorismo, y reiteró que su gobierno apoyaba “al pueblo colombiano” en el combate contra dichas “*lacras sociales*”<sup>5</sup>. Meses antes, durante su visita oficial en abril del 2004, Toledo también le había asegurado a Uribe

la plena cooperación de su gobierno en temas de narcotráfico y seguridad fronteriza<sup>6</sup>.

Detrás de este entusiasmo intercambio presidencial había más que una evidente amistad personal. Estaba también el buen momento por el que las relaciones entre ambos países atravesaban después del cambio de régimen político en Perú, en noviembre del 2000. Las mutuas visitas presidenciales eran apenas la punta del iceberg de un intenso intercambio de cooperación militar, policial y diplomática que se inició con la llegada de Toledo al poder. El correlato de este intercambio fue la firma de varios convenios bilaterales para asegurar el control militar de la frontera—y con ello, según ambos gobiernos, la presencia del estado en dicha zona. No era de extrañar, entonces, los agradecimientos de Uribe. A diferencia de los otros vecinos, cuyo escepticismo era mayor, Toledo había respondido sin reticencias a sus demandas de cooperación para hacer frente a la guerrilla.

La situación había sido radicalmente distinta durante el régimen de Alberto Fujimori. En una clara interferencia en los asuntos internos de Colombia, el ex presidente peruano se movilizó activamente contra

<sup>2</sup> Citado en Grandin (2001)

<sup>3</sup> Diario Oficial El Peruano “Ni Terror ni Corrupción” 23 de octubre del 2004. Esta fue la segunda visita de Uribe a Perú. La primera tuvo lugar durante la Cumbre del Grupo de Río, en mayo del 2003. Énfasis añadido.

<sup>4</sup> El Tiempo “Entrevista: ‘No se firmará un TLC sin garantías de seguridad’, dice el presidente Uribe” Bogotá, 22 de octubre del 2004.

<sup>5</sup> Supr. Nota 2

<sup>6</sup> Caretas, “Amistad en Tiempos de Cólera”, 22 de abril del 2004. Ed. 1820.

los planes de paz del ex presidente Andrés Pastrana. Más aún, su gobierno quedó comprometido en un tráfico de armas para la guerrilla colombiana —bajo la presunta dirección de Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori— que apuntó a liquidar cualquier plan de solución negociada al conflicto colombiano. Como no podía ser de otro modo, la abierta injerencia política —y hasta militar— del gobierno peruano en los asuntos internos de Colombia hizo que las relaciones entre ambos países llegaran a su punto más crítico en mucho tiempo.

La paradoja aquí es cómo dos regímenes políticos distintos, y hasta opuestos, el uno inscribiéndose en la genealogía de la democracia liberal y el otro más bien inscrito en la del excepcionalismo, han asignado al discurso antiterrorista el mismo papel en la organización y legitimación del ejercicio del poder. Al igual que Fujimori, Toledo ha hecho uso del discurso antiterrorista para producir la sensación de la existencia de una amenaza inminente contra la democracia y la sociedad peruanas, que él ha prometido enfrentar aplicando “mano dura” con “firmeza” y “sin ambigüedades”. De este modo, un régimen nacido de las luchas populares contra el autoritarismo de Fujimori y que se ha reclamado ser de transición democrática, no ha podido liberarse de la retórica antiterrorista imaginada y activamente usada por un régimen que, como el de Fujimori,

no sólo nació en medio de la guerra contrainsurgente, sino que hizo de la guerra su modo principal de hacer política.

¿Qué lugar ha tenido el “conflicto colombiano” en la configuración de la retórica antiterrorista en el Perú? ¿Qué uso se ha hecho del mismo para efectos de la política interna peruana? ¿Cómo ha cambiado esto con el ascenso de la “guerra global contra el terror”? El propósito de este artículo es contextualizar las políticas del Perú frente al conflicto colombiano en el marco de los discursos de seguridad que emergen en la región desde finales del siglo pasado. Específicamente, en este artículo se comparan los regímenes de Toledo y Fujimori para argumentar que, no obstante las diferencias centrales en su naturaleza política, las políticas de seguridad frente al conflicto colombiano de ambos regímenes han tenido en común su funcionalidad frente a las agendas de seguridad para la región, definidas por Estados Unidos. Dichas agendas se han desplazado de la “guerra contra las drogas” hacia la “guerra global contra el terror”. Las diferencias emergen de la manera cómo ambos regímenes han utilizado esa posición de funcionalidad, y la autorización que ella supone, para sus propios proyectos políticos. Mientras Fujimori utilizó el conflicto colombiano para mantenerse inconstitucionalmente en el poder, Toledo lo ha usado para asegurarse un apoyo político vital para

afianzar la sobrevivencia de su mandato constitucional.

# I. El “conflicto colombiano”: la nueva guerra del fujimorismo

El 3 de febrero de 1999, el ex presidente peruano, Alberto Fujimori, pronunció un discurso en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, en el que criticó duramente el plan de paz del ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y abogó abiertamente por una solución militar para el conflicto colombiano:

“No se puede conversar con una *banda de delincuentes* cuyo objetivo principal es destruir la democracia, y la toma del poder mediante la violencia. No estoy de acuerdo con la posibilidad de resolver este problema mediante el *diálogo*. ¿Quién es el legítimo gobierno de Colombia? ¿El gobierno elegido o las guerrillas?”<sup>7</sup>.

Fujimori había criticado el proyecto de Pastrana desde el principio, pero esperó llegar a Washington para lanzar su controversial mensaje. Era un momento difícil para Pastrana, pues se disponía a extender por 90 días más la vigencia de la zona desmilitarizada que había concedido a las FARC, en noviembre de 1998, pese a que el primer encuentro que debía sostener

con Manuel Marulanda, el líder histórico de las FARC, había fracasado rotundamente por la inasistencia de este último. Este hecho había aumentado el escepticismo respecto de las posibilidades reales del plan de paz.

Que Fujimori hablara desde un foro académico militar de Washington, en un momento crucial para Pastrana, puso de manifiesto que lo que buscaba era liderar la postura de la “mano dura” en la región. Para ello movilizó el capital simbólico y político que se le acreditó por haber derrotado a los grupos armados peruanos y se puso en las antípodas de Pastrana. Si para este último el supuesto básico era que la guerrilla era una fuerza política beligerante con la que se podía—y debía—dialogar para lograr la paz, para Fujimori la guerrilla no era sino un grupo “delincuencial y terrorista”, al que no se le podía asignar ninguna capacidad de interlocución. Lo único que quedaba por hacer era derrotarlo militarmente, si se quería afirmar la autoridad del Estado.

Fujimori no se quedó en palabras. Cuatro días después de su discurso en Washington, el gobierno peruano envió tropas a la frontera con Colombia. El argumento que se dio fue el de que el Perú tenía que hacer lo necesario para evitar la “infiltración colombiana” en su territorio. Para sustentar dicho argumento, Fujimori habló de 17 incursiones de las

<sup>7</sup> Citado en Sally Bowen y Jane Holligan (2003:400). Ver también Caretas, “Se salió del mapa” Lima, 11 de febrero, 1999 - N° 1554

FARC a territorio peruano, lo que según él había dejado como saldo varios soldados y policías peruanos heridos. También habló de acciones de apoyo de la guerrilla colombiana al narcotráfico<sup>8</sup>. Finalmente, el 12 de marzo, Vladimiro Montesinos y el alto mando militar peruano viajaron a la localidad fronteriza de El Estrecho, en la zona del Putumayo, para inspeccionar el despliegue de cuatro mil efectivos militares a lo largo de la línea divisoria.

Lo que nadie pudo imaginar, entonces, es que detrás del aparatoso despliegue mediático de Fujimori en Washington, Lima y la frontera, se escondió un tráfico de armas a gran escala para la guerrilla colombiana, presuntamente organizado por Montesinos<sup>9</sup>. Bowen y Holligan (2003: 404) sostienen que el primer cargamento de diez mil fusiles procedentes de Jordania para las FARC fue arrojado en paracaídas hacia un área de la selva colombiana controlada por la guerrilla, pocos días después de la presencia de Montesinos

en la frontera. Según todo lo indica, la injerencia del régimen de Fujimori fue más lejos de lo diplomático y político: fue también injerencia militar.

Para los propósitos de este artículo importa poco discutir si el tráfico de armas formó parte o no de una operación encubierta inspirada por la CIA, para justificar el escalamiento del involucramiento militar estadounidense en el conflicto colombiano, tal como ha sido sugerido por varios analistas<sup>10</sup>. Lo que sí nos interesa destacar, en cambio, es que tanto los ataques de Fujimori, como la movilización de tropas peruanas hacia la frontera, formaron parte de una operación mayor de securitización del conflicto colombiano que se puso en marcha en la región con la llegada de Pastrana al poder. El Perú no fue el único en movilizar tropas; aún cuando sin la polvareda levantada por Fujimori, los otros vecinos de Colombia hicieron lo mismo<sup>11</sup>. Fue una operación militar que una revista peruana llamó aptamente “Cercando a Colombia”<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Caretas, “Se salió del mapa” Lima, 11 de febrero, 1999 - N° 1554. Más de un observador se preguntó por qué Fujimori no había hablado antes del asunto.

<sup>9</sup> Varias comisiones investigadoras del Congreso de la República en el Perú encontraron responsabilidad en el ex jefe de inteligencia peruano. Ver Comisión Herrera. Op. Cit. folio 3925. Informe final de la Comisión Townsend. 25/06/02 <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEB/NSAEBB72/final.doc> Actualmente, el caso sigue siendo ventilado en el poder judicial peruano. En diciembre del 2004, una fiscalía colombiana solicitó la extradición de Montesinos por el tráfico de armas para las FARC. “Ordenan Captura de Vladimiro Montesinos. Fiscalía, por Tráfico de Armas para las FARC”. El Tiempo, Bogotá, 31 de diciembre del 2004.

<sup>10</sup> Algunos analistas han sugerido que dicha operación era conocida desde sus principios por la CIA y que ella tenía por objeto incrementar la capacidad de fuego de la guerrilla para así justificar el escalamiento de la intervención militar estadounidense en el conflicto. Ver, entre otros, Bowen & Holligan (2003: 401),

<sup>11</sup> Por ejemplo, por esos mismos días Ecuador anunció que también había movilizado tropas a la frontera para evitar el paso de la guerrilla colombiana a dicho país. (Revista Semana “Fronteras Calientes”, Bogotá, 15 de febrero de 1999).

<sup>12</sup> Caretas, “Cercando a Colombia”, Lima, 23 de febrero de 1999 - N° 1556. Algunos analistas han vinculado este movimiento militar al retiro del Comando Sur del control del canal de Panamá, que tenía que concluirse hacia finales de 1999. El nuevo esquema de seguridad estaría constituido, según estos análisis, por el cerco militar de los países vecinos y la instalación de las FOLs

La llegada de Pastrana al poder hizo posible que la crisis en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante el mandato de Ernesto Samper, acusado de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral, se revirtiera. Pastrana llegó al poder con un ambicioso plan de paz cuyos ejes eran la negociación con la guerrilla y el desarrollo de medidas sociales y políticas para favorecer el proceso de paz. Al pasar por el filtro estadounidense, el plan de paz se llamó Plan Colombia y se convirtió en un plan militar antidrogas, cuyo propósito central era avanzar sobre el sur de Colombia, que era la zona de mayor producción de hoja de coca (Isacson 2000; Tickner 2003). En este marco, la ayuda militar estadounidense inició un escalamiento sin precedentes que llegó a superar en promedio los montos que el ex presidente Reagan destinó a la guerra en El Salvador (Isacson 2000).

Lo que nos interesa destacar aquí es que esta operación de escalamiento no sólo fue militar, sino también discursivo. Es decir, el cerco que empezó a tenderse sobre Colombia también era discursivo<sup>13</sup>. El movimiento básico que abrió paso a este proceso fue el gradual desplazamiento metonímico por

medio del cual la “guerra contra las drogas” fue transformada en “guerra contrainsurgente”. Esto ocurre cuando, en su propósito de justificar el escalamiento de la ayuda militar para Colombia, los principales operadores de la política estadounidense para la región introdujeron el argumento de que la lucha antidrogas en ese país no podía ser desarrollada, si no era al mismo tiempo una lucha contrainsurgente. Entre otros, los generales Barry McCaffrey, jefe de la oficina antidrogas estadounidense, y Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se embarcaron desde 1999 en la tarea de convencer al Congreso de su país de la necesidad de un mayor involucramiento militar para avanzar en la guerra contra las drogas en Colombia. Para estos funcionarios, la guerrilla se había constituido en el principal enemigo no sólo por sus vínculos con el narcotráfico, sino porque bloqueaba las operaciones antidrogas, particularmente en el sur de Colombia.

Como bien ha sugerido Tickner (2002), la tesis que vinculaba a la guerrilla con el narcotráfico no era nueva ni eran principalmente los funcionarios estadounidenses quienes la defendían. Había empezado a abrirse paso entre los formuladores

<sup>13</sup> La securitización, dice Waeber (2000), puede ser analizada directamente a través del estudio del discurso político y las constelaciones políticas. No se trata de estudiar las motivaciones internas o las culturas subyacentes en las políticas de seguridad, sino la constitución intersubjetiva de una amenaza existencial, cuya aceptación como tal es compartida por una audiencia, y en tanto tal con el peso suficiente como para tener efectos políticos sustanciales. En otras palabras, siguiendo la teoría de J.L. Austin sobre los Speech Acts, Waeber nos dice que para analizar qué se hace en seguridad, tenemos que mirar lo que se dice de seguridad. No se trata de preguntarse si lo que se dice es verdad o no, sino cómo lo que se dice constituye un objeto como una amenaza vital, que justifica medidas extraordinarias para hacerle frente.

de política en Washington y Bogotá, hacia mediados de los 90, impulsada, paradójicamente, por el asediado gobierno de Samper (Tickner 2002). Lo que ocurrió con la llegada del Plan Colombia es que la tesis adquirió una nueva intensidad al consolidarse como eje de las políticas de Estados Unidos frente a Colombia.

La conversión de la guerrilla en la amenaza central para los esfuerzos antidrogas, y con ello para la seguridad nacional de Estados Unidos, no sólo justificó el escalamiento de la intervención militar estadounidense en el conflicto colombiano, sino también puso en marcha una cristalización adicional: la idea de que Colombia era una fuente de inestabilidad e inseguridad para la región. Como tal, era un problema cuyo enfrentamiento concernía a toda la región. Este es el contexto en el que se acuñó la idea del “desborde” [spillover] del conflicto colombiano y en el que emergió la figura de Colombia como país “contaminante”<sup>14</sup>.

Esta figura que presentaba a Colombia como “país contaminante” se construyó sobre el supuesto básico de que el estado colombiano es incapaz de controlar su crisis interna y mantenerla en el marco de sus fronteras nacionales. Tickner ha

mostrado cómo esta preocupación por la “debilidad” del estado colombiano inspiró a los formuladores de política estadounidenses, quienes empezaron a considerar que entre sus objetivos principales debía estar, junto con la lucha antidrogas, la ayuda a las fuerzas armadas colombianas para que recuperen el control militar en todo el territorio nacional, como un paso indispensable para el fortalecimiento del Estado. Mientras este proceso tuviera lugar, era necesaria una intervención preventiva de largo alcance para evitar el “desborde”.

*“Ahora mi centro de gravedad es Colombia”*<sup>15</sup>.

Que Fujimori desempeñara con entusiasmo el liderazgo regional en el cerco militar y discursivo contra Colombiano tenía que ver centralmente con el potencial “desborde”. Sus motivaciones eran otras. Desde 1996, Fujimori y Montesinos habían puesto en marcha un proyecto político para asegurar su anticonstitucional segunda reelección en el año 2000. En 1995, Fujimori fue reelegido para un segundo mandato, debido fundamentalmente a que la derrota de los grupos armados peruanos fue atribuida a sus políticas draconianas. El régimen había acumulado un capital

<sup>14</sup> Tickner ha llamado la atención sobre cómo han sido los propios gobiernos colombianos, incluso mucho más que Washington, los que han movilizado argumentos para poner la imagen de Colombia en una situación de emergencia. Por ejemplo, dice que con la normalización de sus relaciones internacionales que introduce Pastrana, Colombia pasó de ser el “país paria” de la época de Samper, a ser un “país problema”, con tendencias a convertirse en un “país contaminante” (2003:420).

<sup>15</sup> Vladimiro Montesinos hablando con Eduardo Calmell del Solar, ex director del diario Expreso. 15 de abril de 2000, citado en Jochamowitz (2002:76).



político enorme, y muchos esperaban que en el período político que se abría, el Perú se iba a encaminar a su reconversión democrática (Degregori 2000). Nada de ello ocurrió. Por el contrario, Fujimori y Montesinos se embarcaron en una aventura autocrática que el ex embajador estadounidense en Lima, Denis Jett, llamó “golpe de estado en cámara lenta”<sup>16</sup>. En el intento de asegurar por medios anticonstitucionales la continuidad de su régimen—sin duda alguna, para cubrir la escandalosa corrupción que estaba saqueando el país<sup>17</sup>—Fujimori y Montesinos atropellaron sistemáticamente su propia normatividad constitucional e iniciaron una campaña de hostigamiento a la oposición política, haciendo uso del control omnímodo que tenían del Congreso y el Poder Judicial.

Con su activa participación en la operación de securitización regional del conflicto colombiano, el régimen de Fujimori no sólo buscó doblegar las críticas que sus políticas de democracia y derechos humanos habían despertado en ciertos sectores de la administración Clinton, sino convencerlos de que la continuidad del régimen por otro periodo más era de vital interés para las políticas de

seguridad estadounidense en la región. La operación de securitización regional del conflicto colombiano trajo una oportunidad inmejorable para que el régimen peruano opusiera una imagen de orden y estabilidad, seguridad y eficacia contra el terrorismo, que supuestamente el Perú proyectaba, contra la imagen de caos e inestabilidad, inseguridad y debilidad contra el terrorismo, que presumiblemente Colombia proyectaba. En otras palabras, era la oposición entre Perú como un modelo de “estado fuerte”, frente a Colombia como modelo de “estado débil”. De allí no era difícil presentar la permanencia de Fujimori en el poder como una necesidad crucial para la seguridad de la región. Vladimiro Montesinos, el jefe de facto de los Servicios de Inteligencia peruanos, considerado por muchos como el hombre más poderoso del régimen, era perfectamente claro en este tema:

“Los americanos tienen un grave problema en la región; tienen un grave problema de estabilidad regional. Entonces, el único país estable política, económica y militarmente es el Perú... Entonces ellos necesitan en el próximo quinquenio

<sup>16</sup> Documento desclasificado 1997 LIMA02792 del 30 de abril de 1998. Durante la gestión del ex embajador Denis Jett, las relaciones entre la embajada y el régimen se enfriaron notablemente.

<sup>17</sup> En su informe del año 2004 sobre la corrupción en el mundo, la organización Transparencia Internacional (2004) dice que el de Fujimori fue uno de los siete regímenes más corruptos de la historia moderna en el mundo y que en América Latina, el único que lo sobrepasó fue el dictador haitiano Francois Duvalier, “Baby Doc” que reinó en Haití entre 1971 y 1986. Ugarteche (2004) aclara que lo que dice Transparencia Internacional sólo se refiere a la corrupción “administrativa”, que es la menor y que actúa como impuesto. La gran corrupción, según Ugarteche, es aquella que acompaña al gran dinero y que involucra normalmente a los jefes y partidos de gobierno.

2000-2005 que en el Perú haya un gobierno firme, un gobierno que se va a quedar, porque va a tener que sacarles las castañas a todos con el tema Colombia... Entonces, a los gringos no les conviene, bajo ningún punto de vista, que el tema del Perú sufra modificaciones”<sup>18</sup>.

Si los funcionarios estadounidenses estaban convencidos o no de este argumento, va más allá de la discusión de este artículo. Lo que nos importa destacar aquí es cómo el régimen de Fujimori tocaba cuerdas sensibles para la política estadounidense en la región. En otro texto hemos mostrado cómo el régimen movilizó también su política antidrogas, que Estados Unidos presentaba como un caso exitoso, para los mismos propósitos de minimizar problemas de derechos humanos y argumentar a favor de mantenerse en el poder<sup>19</sup>. “Yo le soy honesto —le explicó Montesinos a un visitante— aquí tiene que haber una continuidad por razones de Estado, no por razones de la persona, (sino) por razones de Estado”<sup>20</sup>.

El otro paso necesario para sacar adelante la reelección era convencer al público peruano de su

necesidad. El régimen de Fujimori había nacido y se había hecho en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA y no conocía otro modo de hacer política que a través de la guerra. La “guerra contra el terrorismo” había servido a Fujimori para legitimar el uso permanente y generalizado del estado de excepción (Poole y Rénique 2003). Pero, derrotados los grupos armados y resuelto el problema fronterizo con Ecuador, el régimen de excepción y el discurso político de guerra sobre los que Fujimori construyó su legitimación no tenían cómo sostenerse sin una nueva amenaza vital. El conflicto colombiano fue el perfecto comodín que necesitaban para justificar, en el terreno de la seguridad, su permanencia en el poder. Hablando de la segunda reelección de Fujimori, Montesinos les dijo a los jefes de las fuerzas armadas peruanas:

“Acá el objetivo es ganar en primera vuelta. Si ganamos en primera vuelta ya... todo el mundo dice ya no hay, ya firmaron la paz con Chile, con Ecuador, no hay terrorismo, no hay nada y entonces dicen ya qué van a hacer ahora. No, señor, *una nueva amenaza se cierne sobre la seguridad regional y continental que es el narcotráfico en alianza con los*

<sup>18</sup> Conversación de Vladimiro Montesinos con los empresarios de radio y televisión Ernesto Schutz y Manuel Delgado Parker. 25 de agosto de 1999. Congreso de la República del Perú. Segunda Legislatura Extraordinaria. Transcripción de los videos 1677 y 1679.

<sup>19</sup> Sobre la política antidrogas durante la época de Fujimori y su relación con las políticas estadounidenses, ver Rojas (2004).

<sup>20</sup> Conversación de Vladimiro Montesinos con el periodista Patricio Ricketts Rey de Castro.

*grupos alzados en armas.... Y entonces todo el mundo está pendiente que es el tema Colombia y ya le metimos en el escenario el tema Colombia y además nos hemos creado una chambita*<sup>21</sup>.

Como dice Degregori (2000), “No bastaba el inflador interno, y acudieron al inflador externo”. En la pequeña sala del Servicio de Inteligencia Nacional que durante el fujimorismo fue el centro neurálgico del poder y la corrupción, Montesinos explicó a las elites empresariales, políticas, militares, diplomáticas e intelectuales que lo visitaban para arreglar sus problemas políticos, judiciales, de negocios o personales, que el conflicto colombiano era ya un *problema regional*. En un discurso que resonaba con la tesis que acababa de ser lanzada en la región, el ex jefe de los servicios de inteligencia peruanos decía: “El problema número uno para la *región* es Colombia, y es un problema ya de *seguridad continental* (sic), ya no es un problema exclusivamente de los colombianos”<sup>22</sup>. “Es un problema que va a *contaminar* a la región”<sup>23</sup>.

Esa capacidad para “contaminar” venía, según Montesinos, de la situación de caos e inviabilidad en que se encontraba Colombia. Decía

que era un país “inviabile”, que todo allí era un “caos” y que ni siquiera un golpe de estado iba a funcionar bien, por lo que, ante la profundización del conflicto y la incapacidad de contener a la guerrilla y el narcotráfico, Estados Unidos no tenía más alternativa que invadir el país:

“¿Cuál es la solución para los gringos? Es la intervención militar; y al producirse la intervención militar americana, la solución de la guerrilla y el narcotráfico ¿a dónde van a venir? Se van a venir a la parte peruana; y en la parte peruana necesitas tú un gobierno fuerte, de una estabilidad política y unas fuerzas armadas que estén capacitadas”<sup>24</sup>.

En la medida en que el régimen peruano expresaba ese “gobierno fuerte”, que Montesinos imaginaba necesario para contener el desborde del “caos colombiano” hacia territorio peruano, el argumento a favor de la continuidad estaba hecho. ¿Quién más? El Perú tenía ya ese gobierno fuerte y con decisión política. Además, tenía ya organizada una legislación antiterrorista que, medrando en las antípodas del sistema de garantías liberal, había sido “eficaz” con Sendero

<sup>21</sup> Montesinos en reunión con los comandantes generales de las fuerzas armadas. 26 de noviembre de 1999. (Jochamowitz 2001:75)

<sup>22</sup> Montesinos en una reunión con funcionarios estadounidenses no identificados. 22 de julio de 1999.

<sup>23</sup> Montesinos en una reunión con periodista Patricio Ricketts Rey de Castro. 12 de enero de 1998. Énfasis añadido.

<sup>24</sup> Montesinos en una reunión con empresario Dionisio Romero. 22 de junio de 1999.

Luminoso y el MRTA, ¿por qué no iba a ser eficaz en caso de que la guerrilla colombiana entrara al país?

“...tenemos que ir a la institucionalidad democrática plena en el país, a ir desapareciendo esta legislación dura porque ya va desapareciendo la situación de guerra. Pero, ¿qué pasa? *Si se nos mete en tema los colombianos no vamos pues a aflojar el tema de la legislación*”<sup>25</sup>.

El Perú, entonces, estaba preparado. Tenía el aparato jurídico apropiado para hacer frente a la amenaza terrorista. No importaba, claro, que esta legislación de excepción restringiera derechos fundamentales, habilitara tribunales militares, jueces sin rostro, limitaciones al derecho de defensa, condenas elevadas, etc. Menos importaba que entronizara los estados de emergencia como formas ordinarias del ejercicio del poder, la militarización del estado y la subordinación civil a la militar. (De la Jara 2001; Goldman et al 1994; Degregori 2000; Comisión de la Verdad 2003).

Faltaba algo más. Para Montesinos no era suficiente asegurar la continuidad de ese gobierno fuerte y estable, que había derrotado al

terrorismo, y esperar a que el desborde se produjera. Había que *prevenir* y anticiparse. Se jactaba de tener agentes infiltrados en la zona desmilitarizada y decía que la mejor información sobre ella con la que Washington contaba era la que le enviaba el SIN peruano<sup>26</sup>. “Ahora, mi centro de gravedad es Colombia”<sup>27</sup> dijo en más de una ocasión a sus visitantes. Montesinos no iba a esperar pasivamente que “el desborde” ocurriera; ya se había puesto a trabajar para prevenirlo. “Yo lo he previsto—decía Montesinos—, se ha tomado las previsiones; de algo nos pueden acusar, de lo que sea, menos de improvisación”<sup>28</sup>.

Es detrás de esta idea de *previsión* que se agazapó la operación que buscó anticipar el futuro y moldearlo de acuerdo con el presente; un presente que a su vez estaba anclado en el pasado inmediato de la guerra contrainsurgente. Anticipando la emergencia de una nueva amenaza vital, Montesinos y Fujimori buscaron prolongar indefinidamente lo que habían reclamado como fuente principal de la legitimidad de su régimen: la guerra. Como dice Degregori (2001: 226), el Perú estaba atrapado en una guerra permanente contra la hiperinflación, que justificaba un ajuste económico interminable; un autogolpe interminable, que no dejaba paso a

<sup>25</sup> Montesinos en una reunión con un alcalde y un ministro. 12 de junio de 1999. Énfasis añadido

<sup>26</sup> Montesinos en una reunión con el empresario de televisión Crousillat y la estrella de TV Guisella Valcárcel. 5 de enero de 1999. Para más sobre Montesinos y Colombia, ver Jochamowitz (2001:75-78)

<sup>27</sup> Supra.

<sup>28</sup> Supra. Montesinos se jactaba además de que su opinión era requerida por Washington respecto a qué hacer en Colombia.

la consolidación democrática; y una guerra contrainsurgente inacabable, que impedía la reconversión militar. Era el secuestro del tiempo ordinario y la entronización de la excepción como tiempo ordinario (Brederkamp 1999); era el estado de excepción permanente como sustento de la política entendida como guerra permanente (Poole y Rénique 2003).

Y el modo en que buscaron que el público peruano aceptara ser secuestrado en una guerra permanente fue mediante la movilización de la memoria del miedo. Escribiendo sobre la violencia en Irlanda del Norte, Feldman (2003:60) explica cómo determinadas prácticas políticas e institucionales se valen de la violencia para prescribir determinados estados o modos de ser sujeto. La violencia que se aplica sobre los cuerpos opera como el vehículo material a través del cual se construye una memoria sensorial que, a su vez, es incrustada en el marco de la memoria social e institucional. Esta memoria así construida funciona, entonces, como una *memoria prescriptora*; es decir, como un *discurso regulador* que prescribe estados o modos de ser sujeto. En el contexto peruano, el público fue constantemente confrontado a la memoria del terror de Sendero Luminoso y el MRTA, a través de operaciones mediáticas preparadas por el régimen con el fin de reinscribir sobre sus cuerpos la memoria

prescriptora, el discurso regulador que empujara a la gente a seguir aceptando a quienes habían probado ser capaces de librarlos de dicho terror. Movilizando la memoria reguladora, el régimen buscó la continuidad de un modo de subjetividad política por medio del cual, el público peruano había intercambiado derechos a cambio de seguridad.

### ¿Fin del juego securitizador?

Con el abierto apoyo de las fuerzas armadas, Fujimori y Montesinos impusieron la anticonstitucional segunda reelección mediante un vasto fraude electoral. Ni la amplia protesta popular ni la presión de la comunidad internacional fueron suficientes para frenar tales propósitos. En agosto del 2000, muy pocas semanas después de inaugurado su tercer mandato, Fujimori y Montesinos convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que el SIN había desbaratado una mafia que traficaba armas para la guerrilla colombiana de las FARC. De nuevo, entre otras cosas, el discurso estuvo orientado a mostrar cómo los servicios de inteligencia peruanos al mando de Montesinos habían hecho un servicio a la región en su conjunto y que ello no estaba siendo suficientemente valorado por las autoridades estadounidenses<sup>29</sup>.

Casi inmediatamente, sin embargo, se hizo claro que el régimen

<sup>29</sup> La secretaria de estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, no visitó Perú durante una gira por toda Latinoamérica que realizó por aquellos días. El mensaje que el Departamento de Estado enviaba era que no estaban contentos con el desempeño del gobierno peruano en materia electoral y democratización. Fujimori se quejó de dicha actitud en la conferencia de prensa. Ver Bowen y Corrigan (2004)

estaba tratando de instrumentar nuevamente el conflicto colombiano para superar su crisis interna. Quería atribuirse la desarticulación de una operación de contrabando de armas para la guerrilla colombiana, cuando en realidad dicho contrabando había sido organizado, según todo lo indica, por el propio jefe de los servicios de inteligencia peruanos y desde el centro mismo del régimen peruano. Hay quienes sostienen que la ambigüedad de Washington respecto de Montesinos se acabó en este momento. Sin embargo,

la ruptura formal con el jefe de inteligencia peruano ocurrió sólo luego de que éste fuera retirado del

poder por Fujimori, semanas después del escándalo político levantado por la difusión de un video en el que se lo ve comprando a un congresista opositor para cambiar la mayoría en el parlamento<sup>30</sup>. Finalmente, sin Montesinos al costado, Fujimori no pudo sostenerse por muchos días más en el poder y huyó del país en noviembre del 2000 para refugiarse en Japón, la tierra de sus padres, y se puso a buen recaudo de la justicia peruana. Desde allí envió su renuncia por fax<sup>31</sup>.

### **“Ahora mi centro de gravedad es Colombia.”**

## **II. El conflicto colombiano en tiempos de Toledo**

Alejandro Toledo llegó al poder en julio del 2001, tras ganar las elecciones organizadas por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua (Nov. 2000-Jul.2001). Igual que otros procesos transicionales de finales del siglo XX, la caída del régimen autoritario de Fujimori vino con la promesa de un nuevo orden social y político que iba a dejar atrás la militarización del estado, la restricción de derechos y la impunidad frente a

la corrupción y la violación de derechos humanos típicos. Los esfuerzos iniciales del régimen de transición

estuvieron orientados en esa dirección. Por mencionar sólo lo más relevante, Paniagua primero, y Toledo después, respondieron positivamente a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsaron el funcionamiento de una comisión de la verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra interna. También iniciaron procesos de depuración y reforma de instituciones que, como las fuerzas armadas y la policía

<sup>30</sup> Una directiva del Departamento de Estado dice: “...we no longer view Montesinos as having any role in the Peruvian government. Furthermore, there should no be USG contacts with Montesinos”. . . Documento desclasificado STATE180295 del 20 de septiembre del 2000 p. 2

<sup>31</sup> Es importante destacar que el discurso de derechos humanos jugó un papel importante en la caída de Fujimori. A diferencia de lo que ocurre en el pos 11 de septiembre, durante la Administración Clinton la ayuda militar y antidrogas estadounidense continuaba condicionada al desempeño en materia de derechos humanos de los países receptores. El general McCaffrey tuvo muchos problemas para justificar ante el congreso de su país su apoyo al régimen peruano, y las relaciones de la embajada con el régimen se enfriaron durante la gestión del ex embajador Dennis Jet, a consecuencia del tema de derechos humanos y democracia. La fuerza performativa del discurso de derechos humanos perturbó los planes del régimen y sus amigos. Para más sobre este tema ver, Youngers (2003) y Rojas (2003; 2004)

nacional, estuvieron profundamente comprometidas con la corrupción del anterior régimen. Por primera vez en la historia nacional, decenas de militares de alto rango fueron puestos en prisión, acusados de alta corrupción y delitos contra los derechos humanos.

El régimen transicional buscó también marcar diferencias radicales en su política exterior. A diferencia de Fujimori, que buscó aparecer como el líder de la política de mano dura contra el terrorismo, Toledo quiso aparecer como el líder de la democracia en la región. La suscripción de la Carta Democrática Interamericana, en septiembre del 2001, fue la culminación de un esfuerzo mayor que la diplomacia peruana emprendió a la caída del fujimorismo, para convencer a sus contrapartes de que eran necesarios mecanismos eficaces para controlar las arremetidas autoritarias en la región, como las que el Perú acababa de sufrir.

De forma similar, la política exterior respecto del conflicto colombiano pasó de la abierta ingerencia al no involucramiento. Perú reasumió la tesis de que dicho conflicto era un asunto interno de Colombia. Sin embargo, esta postura de “no involucramiento” se tradujo en una postura ambigua. Por un lado, la

diplomacia peruana declaró su apoyo a los “esfuerzos de pacificación” del presidente Álvaro Uribe, entendiendo por éstos la búsqueda de “garantizar la seguridad ciudadana, consolidar el Estado de derecho y asegurar el pleno respeto de los derechos humanos”<sup>32</sup>. Claramente, el apoyo estaba circunscrito por estándares de democracia y derechos humanos. Sin embargo, la “política de seguridad democrática” de Uribe se basó desde el principio en la guerra frontal contra la guerrilla<sup>33</sup>. Por otro lado, la diplomacia peruana hizo una diferenciación entre “acciones terroristas” y “grupos colombianos al margen de la ley”. Sobre esta diferenciación entre “acciones terroristas” y “grupos al margen de la ley” la diplomacia peruana articuló su posición de apoyar la solución negociada del conflicto colombiano, colaborando con la reanudación del proceso de paz “cuando el gobierno colombiano así lo estime conveniente”<sup>34</sup>. Así, esta ambigüedad conducía a un apoyo implícito a la salida negociada, a diferencia de Fujimori.

Por último, el gobierno de Toledo buscó desecuritizar el conflicto colombiano, haciendo frente a las campañas mediáticas que los sectores vinculados al régimen de

<sup>32</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. [www.rree.gob.pe](http://www.rree.gob.pe)

<sup>33</sup> Agradecemos a Arlene Tickner por llamarnos la atención sobre este punto.

<sup>34</sup> En la XVI Cumbre Presidencial del Grupo de Río, llevada a cabo en el Cusco, en mayo del 2003, el Perú apoyó la propuesta del Ecuador respecto de una solución pacífica y negociada del conflicto colombiano. La cumbre presidencial acordó de pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que interpusiera sus buenos oficios para impulsar el proceso de paz y exhortar a los movimientos guerrilleros a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y entrar en diálogo para llegar a una solución pacífica y definitiva al conflicto. (Caretas “Latinoamérica en Capilla” Lima, 29 de mayo del 2003.

Fujimori lanzaron para desestabilizar el nuevo régimen y frenar la lucha anticorrupción. El eje de estas campañas fue denunciar supuestas incursiones de las FARC en territorio peruano, frente a las cuales el gobierno de Toledo no estaba haciendo nada, a diferencia de Fujimori que sí había hecho todo para que tales incursiones no ocurrieran. “Más que de las FARC, cuya amenaza no existía, teníamos que dedicarnos a responder a estas campañas de prensa”, dijo un ex alto funcionario del régimen de Toledo<sup>35</sup>. Hubo algo más importante detrás de estas campañas. Movilizando el tema del conflicto colombiano, ellas buscaron poner en circulación, de nuevo, la fácil ecuación que el régimen de Fujimori había construido, equiparando democracia con debilidad contra el terrorismo, y la necesidad del retorno de la “mano dura”.

Ahora bien, no todo fue radical diferenciación respecto del fujimorismo. En clara contradicción con su política exterior, el gobierno de Toledo profundizó la política de seguridad frente al conflicto colombiano que fue puesta en marcha durante el régimen de Fujimori. La hipótesis del “desborde” se

mantuvo. Por lo tanto, una política de “contención y prevención de su eventual desborde [del conflicto colombiano] hacia nuestro país”<sup>36</sup> era necesaria. Así, el nuevo régimen mantuvo la tesis de que Colombia era fuente de inseguridad, cuyo *potencial* de contagio había que contener.

Podemos decir, incluso, que, en muchos sentidos, el gobierno de Toledo fue más allá que el de su antecesor. Primero, se reforzó la militarización de la frontera con Colombia, incrementando el contingente de tropas. El ex ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, viajó a la zona para inspeccionar personalmente el desplazamiento militar y darle contenido político a un hecho que podía haber quedado en un ámbito estrictamente castrense. Segundo, Toledo hizo lo que ningún gobierno peruano, antes: en menos de dos años firmó varios convenios policiales y militares con Colombia. En octubre del 2002 fue el convenio para la interdicción aérea en la frontera. A finales del 2002 fue un convenio policial. En febrero del 2004 fue un convenio tripartito entre Perú, Colombia y Brasil para la interdicción fluvial en la frontera.

<sup>35</sup> Entrevista del autor con Gino Costa, ex vice ministro y ministro del Interior del gobierno de Toledo, entre julio del 2001 y enero del 2003. Lima, 28 de agosto de 2004.

<sup>36</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. [www.rree.gob.pe](http://www.rree.gob.pe) última visita 15/12/04. En el Libro Blanco de la Defensa Nacional, elaborado durante el régimen democrático, se establece que la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, en particular en Colombia, y “su alianza con el terrorismo” podría constituirse en una amenaza a la seguridad nacional del Perú. Según el documento, esta intensificación de la lucha contra el narcotráfico y “el terrorismo” podría originar “el desplazamiento de esta actividad y otras conexas hacia nuestro territorio, incrementando el tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción de funcionarios y criminalidad, amenazando la economía del Estado, los usos, las costumbres y la salud de la población, lo que configuraría una amenaza a la Seguridad Nacional”. Énfasis añadido para hacer notar el carácter potencial, y nunca efectivo, de la “amenaza” colombiana.



Todos estos convenios estipulaban, en lo fundamental, el intercambio de inteligencia, experiencias y, eventualmente, la cooperación para actividades conjuntas<sup>37</sup>.

Por último, el gobierno de Toledo habilitó el territorio nacional para operaciones militares de entrenamiento e investigación científica conducidas por militares estadounidenses, en áreas de la selva, de geografía similar a la frontera con Colombia. El Instituto de Defensa Legal de Lima registró un incremento inusual de ingresos de personal militar estadounidense, armado y no armado, desde la llegada de Toledo al poder. Según esta importante organización peruana, estos ingresos militares tuvieron que ver fundamentalmente con operaciones de investigación militar y combate de infantería ligera en zonas de selva<sup>38</sup>. Finalmente, grandes operaciones militares de entrenamiento, como el plan UNITAS, que nunca antes habían tenido a la selva como teatro de operaciones, empezaron a tener lugar en dicha área geográfica<sup>39</sup>.

### Securitización y debilidad política

¿Cómo entender esta lógica de ruptura y continuidad respecto del Fujimorismo en las políticas del gobierno de Toledo frente al conflicto colombiano? Sugerimos que antes de que al convencimiento de que la guerrilla colombiana constituía una efectiva e inmediata amenaza para el Perú, las políticas de seguridad del gobierno de Toledo frente al conflicto colombiano fueron moduladas por el pragmatismo político con el que respondió a las demandas de los Estados Unidos en temas de seguridad regional.

Esta lectura tiene asidero en la evaluación que ex altos funcionarios de seguridad del gobierno de Toledo manejan respecto del conflicto colombiano. Para estos ex funcionarios, cuatro años después de iniciado el Plan Colombia, el denominado “desborde” hacia el Perú no se había producido. En la frontera no había masas de refugiados, ni la guerrilla había establecido sus bases en el Perú, ni el llamado “efecto globo” se había producido porque la cantidad de coca cultivada en el Perú se mantenía estable<sup>40</sup>. Según estos ex funcionarios,

<sup>37</sup> Ministerio de Defensa del Perú. [www.mindef.gob.pe](http://www.mindef.gob.pe)

<sup>38</sup> Al respecto, el boletín En la Mira del Instituto de Defensa Legal señaló: “llama poderosamente la atención la cantidad de autorizaciones de ingreso al país de personal militar extranjero, en particular personal militar norteamericano. Si revisamos dichas autorizaciones nos damos con la sorpresa de que la mayoría de ellas están destinadas a realizar investigaciones o trabajos operativos en la zona de la selva peruana, investigaciones sobre efectos de las enfermedades tropicales o aspectos operativos como establecimiento de radares y otros”. Boletín En la Mira, N° 3, Abril del 2003. pp. 12 Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú Ver también Boletín En la Mira N° 7 agosto 2003 pp. 10. Para una lista de las autorizaciones de ingreso ver en especial los números del año 2003. <http://www.defensaidl.org.pe/boletin/>

<sup>39</sup> Entrevista del autor con José Robles y Ana María Tamayo, investigadores del Instituto de Defensa Legal sobre temas de Defensa Nacional. Lima, julio de 2004.

<sup>40</sup> Entrevistas del autor con los ex ministros del Interior del gobierno de Toledo. Gino Costa y Fernando Rospigliosi. Lima 28 de agosto de 2004.

la razón más inmediata para que el tal “desborde” no se produjera era que, dadas sus características geográficas, la frontera es poco propicia para el desarrollo y eventual asentamiento de la guerrilla colombiana. El ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola describió la frontera como “una selva baja, inundada, agreste.... despoblada, agreste, inhóspita y poco atractiva para constituirse en un eventual escenario de asentamiento guerrillero”<sup>41</sup>.

Nosotros sugerimos que, además de estas razones “geográficas”, hay otras que apuntan a procesos de más largo aliento. Entre estos nos parece central la ruptura de la conexión del narcotráfico que existió entre Perú y Colombia desde la década de los 70 hasta mediados de los 90. Durante ese tiempo, los grandes carteles colombianos tuvieron el monopolio de la industria de la cocaína y organizaron la división del trabajo para producirla y exportarla. Mientras Perú y Bolivia eran proveedores de la materia prima (la pasta básica de cocaína), Colombia era la refinadora y exportadora de la cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. La materia prima era trasladada hacia Colombia por vía aérea desde las selvas peruana y boliviana. Las autoridades

estadounidenses pusieron en marcha el programa “Air Bridge Denial” para romper el puente aéreo entre Perú y Colombia. En otro texto hemos argumentado cómo, más que a la eficiencia del “Air Bridge Denial”, la ruptura de la conexión entre Perú y Colombia se debió a la caída de los grandes carteles colombianos<sup>42</sup>. El monopolio que éstos ejercían sobre la oferta de pasta básica de cocaína en el Perú desapareció, y obligo a las mafias peruanas a reconvertirse y volverse exportadoras de cocaína en alianza con los carteles mejicanos. Se originó, pues, un reacomodo en el mercado de la oferta. Así, ante esta pérdida de hegemonía de la conexión colombiana, si la frontera tuvo algún papel durante la bonanza de las mafias colombianas, éste desapareció virtualmente con los cambios en los patrones del tráfico de cocaína<sup>43</sup>.

Todo lo anterior sugiere que la diligente participación del gobierno de Toledo en los esquemas de seguridad frente al conflicto colombiano respondía fundamentalmente a su debilidad y dependencia política y económica de Estados Unidos. Tres eran estas fuentes de dependencia y debilidad.

Primero, la agenda antidrogas. El condicionamiento del

<sup>41</sup> Aurelio Loret de Mola, ministro de Defensa (2001-2004) en “Nunca se han producido enfrentamientos entre las FFAA y las FARC” Lima, 22 de febrero de 2002. Entrevista con Agencia Perú. <http://www.agenciaperu.com/entrevistas/2002/feb/loretdemola.htm>

<sup>42</sup> Al respecto, ver Rojas (2004), Rocken et al., eds., (1999). Para una lectura distinta, ver McClintock (2003)

<sup>43</sup> Como parte de la campaña contra el régimen, la prensa cercana a Fujimori sostuvo que en realidad no había que pensar la presencia de las FARC en términos de su incursión por la frontera, sino de su control del mercado del narcotráfico colombiano que influía directamente en el Perú. Ninguna autoridad peruana ha encontrado algún indicio que dé sustento a este argumento. (Entrevista con Costa y Rospigliosi Lima, agosto de 2004 ).

apoyo de Estados Unidos al buen desempeño de los gobiernos peruanos en la lucha contra el narcotráfico fue ajustado con la llegada de Toledo al poder. Por primera vez, al Perú se le planteó el objetivo de “coca cero” que, según funcionarios estadounidenses, podía ser logrado en los cinco años que Toledo tenía por delante. Ello significaba que el Perú debía erradicar las 40 mil hectáreas de coca ilegal que aún existían en su territorio. Para ello, Estados Unidos incrementó su ayuda antidrogas hasta 300 millones de dólares para ese periodo de cinco años, y renovó el ATPDEA para asegurar incentivos económicos que serían mantenidos sólo si el gobierno de Toledo cumplía con las metas de erradicación planeadas (Rojas 2003, 2004).

A Toledo no le iba a ser nada fácil cumplir con tales metas, debido a la fuerte oposición social que la política de erradicación de la coca encontró siempre entre los campesinos de las catorce cuencas cocaleras del Perú. Ellos, además, ya se encontraban movilizados desde finales del régimen de Fujimori, cuando sus protestas frente a la política de erradicación forzosa de hoja de coca alcanzaron dimensión regional y nacional<sup>44</sup>. Estas protestas fueron una herencia pesada para el nuevo régimen. El gobierno de Toledo se movió entre la negociación y la

confrontación para hacer frente a tales protestas y en muchos momentos tuvo que hacer concesiones a los cocaleros. Tales concesiones no fueron bien vistas por la embajada estadounidense<sup>45</sup>. Sugerimos, entonces, que la diligente cooperación del gobierno de Toledo en el esquema de seguridad, montado por Estados Unidos frente al conflicto colombiano fue una forma de ganar oxígeno para manejar su propio conflicto en relación con la coca.

Segundo, el gobierno de Toledo dependió del apoyo político de Washington para sobrevivir hasta el término de su mandato constitucional. La combinación de la profunda crisis política y moral a la salida del régimen autoritario con las expectativas sociales embalsadas en la década anterior, exigían del nuevo régimen la puesta en marcha de políticas sociales y económicas que marcaran una ruptura con el pasado. Esto no sucedió y Toledo continuó con el mismo modelo económico de Fujimori, lo que le dejó muy pocos recursos para políticas sociales y de generación de empleo. La protesta social emergió desde todos los rincones del país y Toledo tuvo que maniobrar finamente para evitar su caída. Su personal estilo político fue otra fuente de permanente crisis. Durante la mayor parte de su gobierno, la aceptación popular giró alrededor del 10%. En

<sup>44</sup> La erradicación forzosa de la hoja de coca alimentó el crecimiento de Sendero Luminoso en la selva peruana, durante los 80. El gobierno de Fujimori suspendió dicha política a principios de los 90, como parte de su estrategia contrainsurgente. La erradicación forzosa fue reiniciada en 1996, cuando Sendero Luminoso había sido ya virtualmente derrotado. Para más sobre este tema, ver Rojas (2004)

<sup>45</sup> Para más sobre la política antidrogas en la época de la transición ver, Rojas (2003)

los momentos de crisis más aguda, la administración Bush reiteró su apoyo al régimen de Toledo, otorgándole un soporte político fundamental para su sobrevivencia política.

Por último, la diligente participación del Perú en los planes frente al conflicto colombiano debe ser leída también desde la perspectiva militar. La crisis moral y política en que las fuerzas armadas se sumergieron por su estrecho involucramiento con el corrupto régimen de Fujimori y Montesinos vino acompañada de una aguda crisis de recursos. El gobierno de Toledo redujo drásticamente el presupuesto militar y las fuerzas armadas se quedaron sin medios para mantener la operatividad de sus equipos militares y entrenar sus tropas. La participación en las operaciones y programas auspiciados por Estados Unidos en Perú les permitía a los militares peruanos acceder a recursos en términos de equipo ligero, entrenamiento y producción de conocimiento que de otro modo no podían tener <sup>46</sup>.

*“Tenemos un enemigo común” Toledo en el nuevo esquema securitizador*

En este escenario, el gobierno de Toledo quiso hacer virtud de su debilidad. Toledo en modo alguno fue un securitizador al estilo de Fujimori; no pretendió erigirse como el salvador

de la región, ni hizo uso grosero del conflicto colombiano como sí fue el caso de Fujimori y Montesinos, pero sí se embarcó con mucho entusiasmo en el esfuerzo securitizador, liderado esta vez por el propio presidente colombiano, Álvaro Uribe. La llegada de la transición democrática al Perú fue contemporánea con el lanzamiento de la “guerra global contra el terror” luego de los atentados del 11 de septiembre y el ascenso de Uribe a la presidencia de Colombia, en agosto del 2002. Luego del fracaso del plan de paz de Pastrana, Uribe reorientó la política contrainsurgente del estado colombiano en la dirección de guerra frontal contra la guerrilla para obligarla a negociar su rendición, y apenas asumió el poder, ordenó el reinicio de la ofensiva militar contra la guerrilla en el sur de Colombia<sup>47</sup>.

Lo que nos interesa destacar aquí es el énfasis que Uribe empezó a poner en la noción de que el conflicto colombiano ya no era sólo de Colombia, sino de la región. A pesar del incremento de la ayuda militar y de la eliminación de las restricciones en materia de derechos humanos después del 11 de septiembre, paradójicamente, Colombia pasó a ser una prioridad de segundo orden para la alta burocracia en la administración estadounidense que estaba más concentrada en Irak y Afganistán. En términos políticos,

<sup>46</sup> Entrevista del autor con José Robles y Ana María Tamayo, investigadores del Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú. Lima, julio de 2004

<sup>47</sup> Ver más sobre esto en otra parte de esta publicación. Para un buen recuento sobre el periodo de Uribe ver, Tickner (2003), Isacson y Vaicius (2003).

Uribe reemplazó el liderazgo que antes tenían los funcionarios estadounidenses, y hasta el propio Fujimori, en la tarea de convencer a sus contrapartes de que el conflicto colombiano era regional. Por ejemplo, durante la cumbre presidencial del Grupo de Río, Uribe declaró:

“América Latina empieza a darse cuenta de que el terrorismo de Colombia, que hace tanto daño en Colombia, ya es un peligro para todo el continente. Secuestran en Ecuador, hacen daños en Venezuela, ya hay terroristas colombianos sembrando caos y terror en Bolivia”<sup>48</sup>.

El argumento no sólo presenta a Colombia, de nuevo, como fuente de inestabilidad para la región, sino va más allá al proponer la idea de que el contagio ya está en curso. Sugerimos que si Uribe podía sostener este argumento respecto de un “terrorismo colombiano” que siembra “caos y terror” incluso en países como Bolivia, con el que Colombia no tenía fronteras comunes, era porque con el ascenso de la “guerra global contra el terror” después del 11 de septiembre, una nueva forma discursiva fue puesta en

circulación para describir las amenazas vitales. Un concepto central en esta nueva forma discursiva es el de “red terrorista” (terrorist network), que hace referencia a una amenaza vital que ya no se percibe primariamente como localizada en—o proveniente de—un área geográfica en particular, sino que opera desde redes invisibles, amorfas, fluidas, difusas, que no están administradas por una estructura jerárquica, como en el caso de los gobiernos, sino que son animadas desde “nodos” (hubs), de donde salen las instrucciones que circulan en la red. Es decir, la “red terrorista” es una forma de amenaza deterritorializada<sup>49</sup>. Conceptos asociados son los de “país *madriguera* del terrorismo” [harbor of terrorism], que las “redes terroristas” utilizarían para entrenamiento militar, avituallamiento, documentación, etc., y para contactar con los terrorismos nativos; y “soberanía efectiva”, que se refiere a la idea de que estados débiles [failed states] son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en la medida en que no tienen el control (militar) sobre espacios “no gobernados” que sirven como *madriguera* a la “red terrorista”, al narcotráfico u otras amenazas similares<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> La República “Entrevista con Álvaro Uribe ‘Que las FARC se decidan a negociar y que abandonen el terrorismo’” Lima, 25 de mayo de 2003. Está fuera del alcance de este artículo en qué medida Uribe recrea elementos del “modelo Fujimori”.

<sup>49</sup> Después de los atentados del 11 de septiembre, el estudio académico sobre “redes terroristas”, haciendo uso de la teoría de redes creció exponencialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, ver: (Rothenberg 2002; Krebs 2002; Arquila y Ronfeldt 2001).

<sup>50</sup> Para un interesante análisis de cómo los académicos estadounidenses han vinculado los conceptos de “terrorist network” y “failed states”, ver Takeyh y Gvosdev (2002). En América Latina el concepto fue puesto en circulación por el ex jefe del Comando Sur, general James T Hill. Hill, además, introdujo otra categoría de amenazas vitales para Estados Unidos como el “populismo radical” y las “pandillas callejeras”. Para más, ver Isacson et al (2004)

Este aparato conceptual permitió presentar a las FARC como un grupo terrorista nativo (o doméstico) que estaba conectado a la “red terrorista” internacional y que era el símil de Al-Qaeda en América Latina. Por cuanto parte de la “red terrorista” internacional, las FARC podían atacar en otros sitios no sólo para expandir su guerra terrorista, sino para obtener recursos de aquellas “áreas no gobernadas” de los otros estados “débiles” de América Latina (Bolivia, por ejemplo, en el discurso de Uribe). El acoplamiento de los conceptos de “red terrorista”, “estado débil” y “soberanía efectiva”, aplicados acríticamente y con poca imaginación a las complejísimas realidades latinoamericanas, y sobre todo con propósitos políticos y militares, producen un nuevo cuadro en el que, mediante una operación discursiva conceptual, se produce un desplazamiento metonímico: el terrorismo nativo es conectado con el terrorismo global y el conflicto doméstico es enmarcado por la guerra global contra el terror.

Toledo empezó a participar de este discurso. Que lo hiciera se explica, en principio, por el hecho de que su gobierno tuvo que hacer frente a la esporádica reaparición de los restos de Sendero Luminoso. Una de estas reapariciones terroristas

tuvo lugar en marzo del 2002, a pocos días de la visita del presidente George W. Bush al Perú, cuando Sendero Luminoso hizo explotar un coche-bomba en las cercanías de la embajada estadounidense en Lima, que mató a nueve personas. Esta fue ocasión no sólo para que Toledo reafirmara su promesa de “mano dura” contra el terrorismo, sino para colgar el terrorismo doméstico en la red internacional del terrorismo global. “Tenemos un enemigo común” les dijo a los presidentes de Colombia, Bolivia y Estados Unidos, reunidos en Lima con ocasión de la visita de este último a Lima.

Hay otra razón, sin embargo. Como parte de sus esfuerzos por contener y deslegitimar la protesta social, el gobierno de Toledo cruzó en varias ocasiones una delicada línea, haciendo circular la idea de que las FARC podían tener algo que ver con tales protestas sociales. Un ejemplo concreto fue acusar a partidos políticos como Patria Roja de tener vínculos con las FARC<sup>51</sup>. En otras ocasiones, desde el gobierno de Toledo se insinuó la existencia de vínculos entre las FARC, el líder boliviano Evo Morales, y las frecuentes protestas de los agricultores cocaleros peruanos en contra de la erradicación. Así, para el gobierno peruano parecía también que

<sup>51</sup> Patria Roja es un partido de la izquierda maoísta que controla el sindicato magisterial y gremios estudiantiles en varias universidades nacionales y que es activamente opositor del gobierno. Salvo la existencia de un video policial que registra el encuentro entre un presunto miembro de las FARC y otro de Patria Roja, en el que el primero hace entrega de una suma de dinero al segundo, no hay ninguna evidencia consistente de que las FARC hayan establecido conexiones políticas sólidas en el Perú y que estén detrás de, por lo menos, parte de las movilizaciones sociales. (Entrevista con ex ministros del Interior Gino Costa y Fernando Rospigliosi)

protesta social, radicalismo político y guerrilla colombiana formaban parte del mismo “eje del mal”.

Al estrecharse los márgenes de maniobra para el gobierno de Toledo, éste se ha visto obligado a recurrir de forma más creciente a la retórica antiterrorista con el objetivo de movilizar las memorias de la violencia a favor suyo. Y, sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en la época de Fujimori, la falta de credibilidad del régimen de Toledo lo hace aparecer en una dramática escena de sobreactuación. Si la memoria reguladora de la violencia ha de ser movilizada, dos condiciones de felicidad centrales son la credibilidad del gobernante y una fundada sospecha de temor respecto de aquella amenaza que se pretende hacer. Ninguna de estas cosas han ocurrido durante el régimen de Toledo, y entonces, cada vez que éste se ha puesto a sí mismo en el centro del escenario para lanzar sus arengas antiterroristas, en realidad son las sospechas sobre la veracidad de lo que dice las que aumentan entre el público, más que el temor sobre aquella amenaza de la que habla.

### III. A manera de conclusión

Si por “regionalización” del conflicto colombiano se entiende la extensión militar y política de la guerrilla a los países vecinos a Colombia, el caso peruano mostraría que dicha tesis tiene muchas líneas de fuga que hacen que su consistencia como tesis sea, cuando menos, discutible.

Más de cuatro años después de lanzado el Plan Colombia, quienes formularon la tesis del “desborde” siguen esperando que éste se produzca. Y no es que ello no se haya producido porque el “cerco militar” sobre Colombia haya tenido éxito, sino porque, como lo han indicado las autoridades peruanas, no hay evidencias de que la guerrilla colombiana haya querido exportar su guerra hacia territorio peruano, ni querido construir una base de operaciones en el mismo. Sugerimos, entonces, que el caso peruano invita a plantearse la pregunta de qué es lo que se regionaliza “a propósito” del conflicto colombiano.

En este artículo hemos comparado dos periodos políticos discursivamente distintos en la política peruana, para mostrar cómo está frente al conflicto colombiano ha sido activamente constituida en el interior de un marco discursivo central, articulado alrededor de la imagen de Colombia como país “contaminante” para la región. Este marco discursivo central se despliega con ocasión de las guerras que Estados Unidos libra en la región, pero, como muestra claramente el caso peruano, durante la época de Fujimori, pueden ser los gobiernos de la región los que no sólo participan activamente de la securitización regional del conflicto colombiano, sino los que llevan la propuesta securitizadora hasta límites impensados. En ocasiones, resulta evidente que más que la propia política exterior de Estados Unidos, son los

gobiernos de la región quienes están vivamente interesados en construir y mantener la imagen de Colombia como un lugar de emisión de terrorismo, caos e ingobernabilidad, para poder medrar políticamente de dicha imagen. Fujimori, por ejemplo, utilizó escandalosamente el conflicto colombiano para sus objetivos de mantenerse en el poder anticonstitucionalmente.

Pero lo de Fujimori no era sólo una forma específica de organizar el poder, sino una forma de imaginar y referirse a la política que estaba basada en la lógica de la guerra permanente y la movilización del temor como sustento fundamental de la relación entre el estado y la ciudadanía. Era movilizar los legítimos temores de la gente frente al terrorismo para generar el respaldo a los gobernantes, demonizar al adversario político, promover la militarización del estado, restringir los derechos ciudadanos, y asegurarse la permanencia en el poder para lucrarse de él.

Esta sola experiencia debería haber sido suficiente para llamar la atención sobre el profundo error que se comete al construir como una amenaza vital a Colombia, para forzar a los países de la región a participar de los esquemas de seguridad militarizados que supuestamente van a frenar la expansión del conflicto. Los países de la región, y particularmente vecinos como el Perú, tienen los mismos o mayores problemas que Colombia, por su potencial “contaminador”, por

ejemplo el autoritarismo de Fujimori, puede resultar incluso más peligroso para la región que el propio “conflicto colombiano”.

Del mismo modo, la experiencia de un régimen transicional como el de Toledo, que había llegado con la promesa de democracia y derechos, muestra cómo el proyecto democrático no tiene piso firme en el interior de un marco discursivo que plantea el problema de la seguridad como el eje sobre el cual gira el conjunto de las relaciones políticas. Este marco discursivo de seguridad hace que las fronteras entre un problema de disenso y otro de seguridad sean ambiguas e inciertas, y hace que el desacuerdo (esencial para el juego democrático) pase a ser objeto de sospecha y persecución. El gobierno de Toledo participa activamente de los esquemas de securitización regional para asegurarse de un mínimo de espacio político que le ayude a llegar hasta el término de su mandato en el marco de una protesta generalizada contra su gobierno por las promesas incumplidas de la transición. A la vez, los recursos retóricos habilitados y autorizados por los marcos discursivos de seguridad regional, le han permitido a Toledo, en ocasiones, convertir un problema social y político en uno de seguridad nacional. El efecto inmediato de esto es el cierre del espacio para la disensión y la protesta propias de la democracia.

Waeber sostiene que un concepto amplio de seguridad hace que mucha de la actividad social y política



sea secuestrada para ser manejada desde los aparatos de seguridad especializados, normalmente poco sujetos al control público (servicios de inteligencia, fuerzas armadas, etc.). El problema no es sólo cómo se establecen controles democráticos sobre esos aparatos de seguridad, sino, centralmente, qué se dice y se constituye como objeto de seguridad. Sería peligroso que bajo la tesis de la “regionalización” del conflicto colombiano, se extendiera en la región la idea de constituir el disenso y la protesta social como un asunto de seguridad nacional.

## Bibliografía

- Arquilla, John y Ronfeldt, David. 2001. “Networks and Networks. The Future of Terror, Crime, and Militancy”, en [www.rand.org/publications/MR/MR1382](http://www.rand.org/publications/MR/MR1382).
- Bowen, Sally y Holligan, Jane. 2003. El Espía Imperfecto. *La Telaraña Siniestra de Vladimiro Montesinos*, Lima: Ediciones Peisa S.A.C.
- Bredenkamp, Horst. 1999. “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes” in *Critical Inquiry* V.25(2), Winter, pp.249-66.
- Degregori, Carlos Iván. 2000. *La Década de la Antipolítica. Auge y Huída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Feldman, Allen. 2003. “Political Terror and the Technologies of Memory: Excuse, Sacrifice, Commodification, and Actuarial Moralities” en *Radical History Review* 85 (winter), pp. 58-73
- Goldman, Robert et al. 1994. *Informe de la Comisión de Juristas Internacionales sobre la Administración de Justicia en el Perú*, Lima: Instituto de Defensa Legal.
- Grandin, Grez. 2001. *Denegado en su Totalidad. Documentos Estadounidenses liberados*, Ciudad de Guatemala: Avanco.
- Isacson, Adam e Ingrid Vaicius. 2003. “The War on Terror Meets the War on Drugs. The United States Military Involvement in Colombia Climbs to the Next Level” *International Policy Report*, Washington DC: Center for International Policy.
- Isacson, Adam. 2000. “Getting in Beeper. The United States’ Growing Involvement in Colombia’s Conflict”. *International Policy Report*, Washington DC: Center for International Policy.
- Isacson, Adam et. al. 2004. “Blurring the Lines. Trends in US Military Programs in Latin America”. Washington, DC: Latin American Working Group, CIPONLINE y WOLA.
- Jara, Ernesto de la. 2001. *Memoria y Batallas en Nombre de los Inocentes. Perú 1992-2001*, Lima: Instituto de Defensa Legal.

Jochamowitz, Luis., Comp. 2002. *Vladimiro, Conversando con el Doctor. Expediente II*, Lima: Empresa Editora El Comercio.

Krebs, Valdis E. 2002. "Mapping Networks of Terrorist Cells", en *Connections* 24(3), pp. 36-42.

Ludescher, Mónica. 1999. "Estado e indígenas en el Perú: un análisis del marco legal y su aplicación", en *Law and Anthropology*, 10, pp. 122-164.

McClintock, Cynthia y Vallas, Fabián. 2003. *The United States and Peru: Cooperation at a Cost*, New York: Routledge.

Poole, Deborah y Gerardo Rénique. 2003. "Terror and the Privatized State: A Peruvian Parable" en *Radical History Review* 85 (Winter), pp. 150-163.

Rocken, Theo et al., eds. 1999. *The Drug War in the Skies. The U.S. Air Bridge Denial Strategy*, Cochabamba: Transnational Institute.

Rojas-Pérez, Isaías. 2003. "The Push for Coca Zero. US Drug Policy and Democratic Transition in Peru", en *Drug War Monitor*, Washington, DC: WOLA.

Rojas- Pérez, Isaías. 2004. "US Drug Policy, Human Rights and Democracy in Peru" in Youngers, Coletta & Eileen Rosin, eds., *Drugs and democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy*, Boulder, Co: Lynne Rienner Publishers.

Rothenberg, Richard. 2002. "From Whole Cloth: Making up the terrorist Network" en

*Connections* 24(3), pp. 36-42.

Takeyh, Ray y Gvosdev, Nikolas. 2002. "Do Terrorist Networks Need a Home?" en *The Washington Quarterly* 25:3, pp. 97-108.

Tickner, Arlene B. 2002. "U.S. Foreign Policy in Colombia: Bizarre Side-Effects of the 'War on Drugs'", en Gallón, Gustavo y Welna, Christopher, eds., *Democracy, Human Rights and Peace in Colombia*, South Bend: University of Notre Dame Press.

Tickner, Arlene B. 2003. "La 'Cruzada' Mundial contra el Terrorismo y las Relaciones Colombia-Estados Unidos" en Mason, Ann y Orjuela Luis, eds., *La Crisis Política Colombiana. Más que un Conflicto Armado y un Proceso de Paz*, Bogotá: Universidad de los Andes

Transparency Internacional. 2004. *Global Corruption Report 2004*, en <http://www.globalcorruptionreport.org/>

Ugarteche, Oscar 2004. "Caso México y Perú: Corrupción latinoamericana" Tomado de <http://www.alainet.org> (<http://alainet.org/docs/5787.html>)

Waeber, Ole. 2000. "Security Agendas Old and New, and How to Survive Them". Manuscrito presentado en el taller "The Traditional and the New Security Agenda: Inferences for the Third World", Buenos Aires: Universidad Torcuato di Tella.

Youngers, Coletta. 2003. *Violencia Política y Sociedad Civil en el Perú: Historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos*, Lima: IEP, pp. 192.